



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: BLANCA CECILIA MONTOYA VÁSQUEZ
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 001 2018 00417 01
Sentencia: S-208

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de octubre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

BLANCA CECILIA MONTOYA VÁSQUEZ demandó a la ACP COLPENSIONES, para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo SERGIO HUMBERTO MONTOYA MONTOYA, a partir del 31 de mayo de 2017, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus pretensiones, que su hijo SERGIO HUMBERTO MONTOYA MONTOYA falleció el 31 de mayo de 2017; que solicitó la pensión de sobrevivientes el 26 de julio de 2017; que la entidad demandada negó su solicitud según Resolución SUB 179804 del 30 de agosto de 2017 por no acreditar el requisito de dependencia económica que exige la ley; que interpuso recurso de apelación y COLPENSIONES confirmó lo decidido previamente por medio de la Resolución DIR 16462 del 27 de septiembre de 2017; que su hijo alcanzó a cotizar un total de 1131 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 154.43 corresponden a los 3 años anteriores a la fecha de la muerte; que en la decisión de la entidad no se tuvieron en cuenta sus circunstancias especiales ni las declaraciones extrajuicio presentadas; que su hijo vivía con ella y falleció a los 48 años de edad y era soltero, sin hijos y sin compañera permanente; que es pensionada por el riesgo de vejez en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, pero la ausencia de los ingresos de su hijo le representa un desequilibrio económico al no ser suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas; que es viuda y otros dos hijos ya habían fallecido previamente; y que no se le puede exigir una dependencia total y absoluta como lo viene haciendo la entidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda toda vez que no se logran acreditar los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión reclamada. Frente a los hechos, acepta la fecha de fallecimiento de SERGIO HUMBERTO MONTOYA MONTOYA, su calidad de afiliado a esa entidad y todo lo relacionado con la solicitud presentada y posterior decisión de negar la pretendida pensión. Frente a lo demás, señala que no le consta la dependencia económica que se alega, la cual deberá ser probada en el curso del

proceso. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de lo solicitado, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 15 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas por la demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación indicando que la jueza de primera instancia al momento de proferir el fallo, encontró que no se logró acreditar el requisito de dependencia económica de la demandante respecto su hijo fallecido y que no se cumplió con la carga de la prueba. Dice además que se ha interpretado de manera errónea el art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003 al considerar que no cumple con el requisito de dependencia económica para resultar beneficiaria de la pensión de sobreviviente.

La calidad de vida de la señora BLANCA CECILIA se vio afectada con el fallecimiento de su hijo al privarse de la ayuda económica que este le brindaba; es cierto que la dependencia económica no fue total, ni absoluta, pero con la muerte de su hijo quien vivía en el mismo hogar se afectó la condición económica y nivel de vida que mantenía antes de este evento. Es latente el estado de soledad de mi representada, con casi todos los miembros de su familia fallecidos y afrontando una enfermedad de origen común que le sobrevino desde el mismo

momento del fallecimiento de su cónyuge, la cual ha empeorado con el fallecimiento de sus hijos. No se tuvo en cuenta que el señor SERGIO HUMBERTO falleció a sus 48 años de edad, soltero y sin hijos. Considera que los padres no deben acreditar mendicidad o carencia total de ingresos para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes con sus hijos y si bien percibe un ingreso fijo mensual por concepto de pensión, no le alcanza para llevar la vida en las mismas condiciones que llevaba con vida del causante. La ley no dice en ninguna parte que un beneficiario de la pensión de sobreviviente deba tener un límite de monto de su pensión, basta con probar que su calidad de vida desmejoró al privarse de la ayuda económica que ese hijo le brindaba.

De conformidad con el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que COLPENSIONES de manera injustificada ha dilatado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, considera que el interés por mora del que trata el artículo previamente citado debe causarse a partir del día 27 de septiembre de 2017 hasta que se incluya su derecho en nómina y cese la mora, máxime tratándose del riesgo de sobreviviente cuyo término no debe sobrepasar los 2 meses de conformidad con la Ley 717 de 2001.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de la demandante presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se revoque la decisión de primera instancia teniendo en cuenta que la señora BLANCA CECILIA cumple con las exigencias del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no solo por ser la madre del causante, sino también por la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, ya que al privarse de su ayuda ha sufrido un deterioro palpable en su calidad de vida. Advierte que la pensión de vejez que recibe es compatible con la de sobrevivientes que se reclama en los términos de la sentencia C-111 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.

Agrega que no se tuvieron en cuenta sus circunstancias especiales derivadas de su condición de viuda sin derecho a pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, además de que otros dos de sus hijos también se encuentran fallecidos, sumado al hecho de que la entidad no allegó al proceso la investigación administrativa con base en la cual negó la petición, lo que demuestra la mala fe en su actuar.

Posteriormente, el apoderado de COLPENSIONES también hizo uso de su obligación legal indicando que está facultada para adelantar investigaciones a las que considere que haya lugar durante el trámite de las actuaciones administrativas que son de su competencia, lo anterior con el fin de determinar con certeza la ocurrencia de los hechos generadores de obligaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Sistema General de Pensiones y las normas concordantes para el reconocimiento de prestaciones económicas a favor de los afiliados y/o las personas que invocan la calidad de beneficiarios. En el presente caso, esa investigación da cuenta de otros ingresos que percibe la demandante, de manera que puede subsistir sin necesidad de los recursos que le suministraba su hijo.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, a través del recurso de apelación presentado por la apoderada de la señora BLANCA CECILIA MONTOYA VÁSQUEZ se cuestiona el fallo de primera instancia a través del cual se ABSOLVIÓ a la entidad accionada de las pretensiones de la demanda, concretamente, al no acreditarse la dependencia económica con respecto a su hijo fallecido al momento de presentarse el deceso, hecho ocurrido el 31 de mayo de 2017, atendiendo a que es ello requisito necesario para el surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, literal d), según el cual, a falta de cónyuge, compañero (a)

permanente del causante, tendrán derecho a dicha prestación los padres si dependían económicamente de aquel.

Y será éste - el requisito de dependencia económica - el asunto central que deberá analizarse, ya que frente al hecho de la calidad de madre y el número de semanas de cotización que dejó acreditadas SERGIO HUMBERTO MONTOYA MONTOYA, nada se discute a ésta altura del proceso, en tanto ambos han quedado plenamente acreditados e incluso fueron aceptados por la ACP COLPENSIONES.

Vistas así las cosas, es de la incumbencia de la demandante, quien reclama para sí el derecho a la pensión de sobrevivientes, acreditar en el proceso que cuando su hijo falleció era este quien la sostenía económicamente, o, al menos, que le prestaba una contribución pecuniaria determinante para proporcionarle un sostenimiento digno y congruo, entendido como aquel que habilita al beneficiario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Lo anterior habida cuenta que, en el proceso judicial, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio. Se ha explicado insistentemente que la noción de la dependencia económica contiene un alcance relativo, en tanto debe analizarse en cada caso específico si la contribución del causante para con sus ascendientes, en caso de darse, era o no determinante para la conservación y sostenimiento de sus condiciones habituales de vida.

Al respecto, la jurisprudencia laboral ha interpretado la noción general de la dependencia económica, en cuanto que no se descarta que los padres pudieran recibir un ingreso adicional o tener su propio patrimonio, siempre que éstos no los convierta en autosuficientes

económicamente. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, la parte demandante debe demostrar que recibía un aporte proporcionalmente significativo y determinante con respecto a los otros ingresos que percibe. Así lo ha explicado en múltiples providencias como, a título ilustrativo, la SL 14923 de 2014; o, entre las más recientes, la SL 2877 del 24 de julio de 2019, SL 650 del 19 de febrero de 2020 o más recientemente la SL 4300 del 25 de agosto de 2021, rad. 87641, en la que de manera amplia señaló:

“... se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; empero, no se puede entenderse que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL14539-2016, CSJ SL4103-2016 y CSJ SL16184-2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676, y que se recuerdan:

a) La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier

otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

*Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que **tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia..***

(Negrilla fuera del original)

Así las cosas, lo pertinente es examinar el material probatorio para determinar si la señora BLANCA CECILIA MONTOYA VÁSQUEZ cumple o no con el presupuesto de la prueba en torno a la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, atendiendo a que, se reitera, la entidad accionada y la funcionaria de primer grado han cimentado su decisión en la falta de este requisito.

En este sentido, lo primero que cabe advertir es que la entidad negó la prestación solicitada según resoluciones SUB 179804 del 30 de agosto y DIR 16462 del 27 de septiembre, ambas de 2017 con base en la investigación administrativa previamente realizada en la que se concluyó lo siguiente: “... no se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por la señora Blanca Cecilia Montoya Vásquez, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa...”

De ese documento, que no fue aportado al proceso, se conoce únicamente la conclusión final que da cuenta de que la demandante y el causante vivían bajo el mismo techo en su condición de madre e hijo y que se pudo establecer *"... que el causante ayuda de manera económica a los gastos del hogar; es decir que no existía una dependencia económica total sino parcial; porque la solicitante es pensionada por vejez, desde el año 2004 y su ingreso de su mesada equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Por último, no se acredita porque la señora Blanca Cecilia Montoya Vásquez, tiene ingresos económicos fijos de manera mensual y el aporte económico que realizaba su hijo no superaba \$200.000 mensuales."*

Es sabido que la investigación pre judicial que realizan las entidades Administradoras tiene cabida dentro del proceso no como un documento de carácter vinculante o determinante, sino como un medio probatorio más del conjunto aportado al plenario, que ha de examinarse de consuno con los restantes medios de convicción, sin que las declaraciones allí rendidas resulten vinculantes para el operador judicial.

Y a pesar de que tal documento no fue aportado al proceso, atendiendo a la totalidad de las pruebas recaudadas en el proceso y de acuerdo al contexto en el que se desarrollaba la vida del causante y su grupo familiar, que se reducía para ese entonces a su madre y una hermana que no vivía con ellos, la realidad de la situación da cuenta de que lo aportado económicamente por SERGIO HUMBERTO no era determinante para la conservación de las condiciones habituales de vida de su madre.

Con las declaraciones recibidas en audiencia pública virtual dentro del presente proceso, obviamente con la garantía del derecho de contradicción, que lo fueron los testimonios de AMPARO DE JESÚS RÍOS OSPINA, TERESA DE JESÚS SALDARRIAGA y ORLANDO DE JESÚS GONZÁLES URIBE, han quedado acreditadas situaciones tales

como las siguientes: **1)** el causante no tenía hijos, no era casado y no tenía relación con alguna persona con carácter de compañeros permanentes; **2)** para la fecha de la muerte el causante vivía únicamente con su madre, la demandante; **3)** la señora BLANCA CECILIA ha sido ama de casa, sin bienes distintos a su lugar de residencia que le dejó su esposo y sin actividades que le generen ingresos económicos; **4)** su único ingreso fijo proviene de la pensión de vejez reconocida desde 2004 por el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la cual comprende 14 mesadas al año; y **5)** no existen otras personas que le suministren algún tipo de ayuda o contribución para el cubrimiento de sus necesidades básicas, ya que su esposo y otros dos hijos fallecieron y su otra hija está casada y tiene sus propias obligaciones.

Fuera de lo anterior, la Sala considera que la prueba testimonial recibida en el curso de éste proceso no alcanza a generar un pleno convencimiento acerca de la real situación que se vivía en aquella familia para la época en que el causante falleció. A esa conclusión se llega en tanto las declaraciones recibidas no generan certeza y convicción por la falta de claridad y por las contradicciones en que incurrieron los testigos.

A pesar de que se presentaron a declarar personas cercanas a la familia de la demandante, conocidas por ella desde hace muchos años, en esas declaraciones se informan situaciones distintas y que no coinciden con lo que ella misma dijo en su interrogatorio de parte, así como tampoco con la conclusión de la investigación administrativa, sin que sean suficientes para entender que ha quedado demostrada la dependencia económica que exige la ley para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

En primer lugar, la testigo AMPARO DE JESÚS RÍOS OSPINA, quien dijo conocer a la demandante desde hace cerca de 50 años, advirtió que ésta siempre ha sido ama de casa, que vive en casa propia, que

no tiene otras propiedades y que no ha recibido herencias "... de ninguno, de los hijos ni del esposo, de los padres tampoco, que yo sepa ella no ha recibido herencias".

Además, explicó al despacho que BLANCA CECILIA es pensionada desde hace 13 años más o menos, que siempre vivió con su hijo, que su otra hija no le colabora porque es casada y su esposo desempleado hace más de 4 años y que la última ocupación de SERGIO HUMBERTO "... fue mesero en un bar muy reconocido en Sabaneta, propiedad de un señor ALBEIRO AMAYA ... que yo sepa trabajó para ese señor 15 años larguitos... El sueldo de SERGIO en ese entonces era \$200.000 semanales, pero a él le superaban sus propinas porque era un bar muy acogedor en Sabaneta y él era una persona que era muy querido por la comunidad".

De ese salario la testigo dijo que "... él le daba su salario a su madre, para los bienes de la casa, el mercado, la legumbre, le ayudaba a la mamá a pagar los impuestos, para los gastos de la casa", agregando que "Semanalmente que yo sea testigo, él le daba \$200.000 y lo que se hiciera falta para alguna cosita, 5 o 20 mil pesitos."

En segundo lugar, TERESA DE JESÚS SALDARRIAGA informó que SERGIO era el único apoyo que la demandante tenía; que ésta vive en una casa de dos pisos de propiedad de la hija, BLANCA vive en el segundo y la hija en el primero, pero que antes vivía en la casa de ella donde levantó sus hijos, y fue la que le dejó el esposo; que no tiene actividades que le generen ingresos y que el hijo SERGIO "... vivía con la mamá y veía prácticamente por ella. MÓNICA es casada hace por ahí 6 años, antes de fallecer SERGIO, vivía con la mamá y con SERGIO."

Dijo, además, al igual que la anterior testigo, que "... él trabajaba en un establecimiento de mesero, cerquita a la Alcaldía, aquí como a 2 o 3 cuadritas, los ingresos que yo sepa eran como de \$200.000, lo que pasaba era que a él con las propinas le iba muy bien (...) Yo tengo

entendido que eran semanales, me parece" (Es reiterativa en la expresión, *"tengo entendido"*)

Finalmente, ORLANDO DE JESÚS GONZÁLES URIBE, amigo de la familia y vecino de toda la vida, señaló que la casa donde ella vive es propia que le dejó el esposo; que la casa es de un piso, pero ella vive en el segundo sin tener conocimiento de a quién pertenece el primero; que no tiene más propiedades; que ella es pensionada hace aproximadamente 13 años y por valor de un mínimo; y que no tiene establecimientos de comercio ni actividades que le generen ingresos.

Sobre la situación laboral de SERGIO HUMBERTO dijo que hasta la fecha de su muerte trabajaba en una heladería en Sabaneta; que aparte del mínimo se ganaba lo que le daban en propinas, pero no sabe cuánto; que, en esos negocios, como hay gente que le da, hay otros que no; y que él toda su vida vivió en la casa con la mamá.

En cuanto a la destinación de sus ingresos, dijo, también, que: *"Tengo entendido que le daba \$200.000 semanales, entre hombres uno se cuenta sus cosas y muchas veces uno se encontraba y me decía, yo era muy amigo de él y sé que le daba esa cantidad de dinero, él no le faltaba a la mamá con la plata."*

De otro lado, en el interrogatorio de parte realizado a la propia demandante se hacen algunas afirmaciones que no pueden ser consideradas como elementos de prueba, especialmente por el hecho de no estar respaldadas en otros medios o no coincidir con lo que se extrae de los testimonios o de la documental aportada.

Afirma por ejemplo que, como gastos mensuales, la señora BLANCA CECILIA destina \$1'200.000 mensuales para servicios, impuesto predial, medicamentos por ser enferma psiquiátrica por valor de \$600.000 o \$700.000 mensuales, la comida y acompañamiento por su estado de salud. También afirma que cuando no le alcanza, otra hija

que tiene le colabora, pero no mucho porque es casada y su esposo está desempleado desde la pandemia; que de impuesto predial paga \$229.000 trimestral y que vive en una casa de 3 pisos pero que son de la cuñada, de ella es solamente donde está viviendo que es el tercer piso.

De todo lo anterior, se pueden extraer como conclusiones o circunstancias que llevan a la Sala a considerar que no está acreditada la dependencia económica que exige la ley y la jurisprudencia las siguientes:

- Según la investigación administrativa, la ayuda suministrada por el señor SERGIO HUMBERTO a su madre ascendía a \$200.000, aunque en el proceso los testigos y la demandante coincidieron en afirmar, todos ellos y de manera exacta, que era un valor de \$200.000 pero semanales.
- La señora BLANCA CECILIA es pensionada por vejez por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el año 2004 y recibe 14 mesadas al año por valor de un salario mínimo mensual vigente.
- Cuando se le preguntó a la demandante que informara de manera concreta a qué destinaba el dinero que le suministraba su hijo, solo indicó que lo utilizaba para "... comprar verduras en la casa, la carne, la leche, huevos", contrario a lo que dijo la primera de las testigos, quien señaló que también lo destinaba para el pago de impuestos y en general los gastos del hogar.
- Al margen de lo anterior, en atención a que se trataba de casa propia, el valor por impuesto predial que se pagaba era de \$229.000 trimestral, esto es, \$76.333 mensuales, sin que fuera entonces necesario el pago de arriendo, así como tampoco de administración alguna.

- Aunque afirme que necesitaba medicamentos psiquiátricos mensuales, la prueba documental aportada da cuenta de atenciones en esa área de la salud, pero posteriores a la muerte de SERGIO HUMBERTO en mayo de 2017, en muchas de las cuales se registra que el motivo de la consulta es *"... proceso de elaboración de duelo por la muerte de su hijo"*.

Aparte de estas situaciones, existen una serie de contradicciones en las declaraciones de los testigos que le restan credibilidad a sus relatos, como por ejemplo las siguientes:

- Dice la demandante que tiene una hija que le colabora cuando puede, pero que no es mucho porque es casada y el esposo está sin empleo desde la pandemia, mientras que la testigo AMPARO DE JESÚS señaló que esa hija no le colabora y que el esposo está desempleado desde hace más de 4 años.
- Sobre las características de la casa en la que vive, circunstancia básica y de fácil recordación siempre que los testigos afirman conocer a la demandante hace 40 o 50 años y visitarla constantemente, se contradicen en tanto la propia BLANCA CECILIA informó que vive en una casa de su propiedad que le dejó su esposo, que la casa es de tres pisos, en el tercero de los cuales vive ella y que los dos pisos de abajo son de su cuñada; mientras testigos como TERESA DE JESÚS – quien aseguró que se mantenía prácticamente donde ellos - dice que la casa es de dos pisos, que BLANCA vive en el segundo y que la propiedad es de su hija quien vive en el primero; a su vez el señor ORLANDO DE JESÚS, dijo de manera confusa que la casa es de un piso, aunque también señaló que la demandante vive en el segundo, indicó también desconocer quien vive en el primero y que la hija vive en otra casa que queda cerca al parque principal de Sabaneta.
- Así mismo, como arriba se dijo, la actora y otros testigos manifestaron que la casa se la dejó su esposo, quien falleció

cuando ella tenía 32 años de edad, en tanto la primera testigo, AMPARO DE JESÚS RÍOS OSPINA, afirmó sin vacilar que aquella nunca ha recibido herencias.

Vale decir, haciendo el parangón con la exigencia que por jurisprudencia ha sido establecida para este tipo de situaciones, con los anteriores elementos de prueba, no es posible concluir que se trataba de una ayuda *cierta y no presunta; periódica y no ocasional; y significativa* respecto del total de ingresos de la beneficiaria, de manera que no pude decirse que se constituía en su soporte económico, sino más bien en una simple colaboración a los gastos del hogar, como lo haría cualquier hijo de familia, quien además habitaba la misma casa lo que implica una serie de gastos para sus propias necesidades básicas.

Consecuente con lo anterior, como la señora BLANCA CECILIA MONTOYA VÁSQUEZ no reúne los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de madre del señor SERGIO HUMBERTO MONTOYA MONTOYA, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de octubre de 2021.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bea379523af9b7b89f6370377543d6bc0e36ab14a9baf1594af6da6f12b9923f**

Documento generado en 11/08/2022 01:44:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>